

# Los colegios profesionales sanitarios alicantinos integrados en UPSANA pidieron también que se retire el Real Decreto 1/2012

El Colegio también buscó el apoyo y la unidad con el resto de profesiones sanitarias. De este modo, los colegios profesionales de la provincia de Alicante, representantes de médicos, farmacéuticos, enfermeras, veterinarios, fisioterapeutas, odontólogos y estomatólogos, podólogos, psicólogos y dietistas-nutricionistas, integrados en la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA), en los que se agrupan unos 30.000 colegiados, hicieron frente común y mantuvieron una reunión para analizar el alcance de las medidas propuestas en el Decreto Ley 1/2012, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit de la Generalitat Valenciana. Tras ello adoptaron de común acuerdo rechazarlo de pleno y pedir su retirada, al tiempo que se demandó de la Administración que se busquen y articulen medidas alternativas, consensuadas con los profesionales sanitarios que las van a llevar a cabo, que consigan hacer eficiente la gestión del sector público y no atenten contra las condiciones económicas y laborales de los sanitarios.

Los representantes colegiales entienden que no son los profesionales sanitarios los causantes de la actual situación de déficit económico y que por tanto no se les tiene que hacer pagar de pleno a ellos las consecuencias de la misma, sino a

otros a los que habría que pedir responsabilidades. Para evitar situaciones como ésta y para propiciar la salida de la misma abogaron por una mayor profesionalización de la gestión a fin de hacerla más eficiente, aspecto éste necesario para la sostenibilidad futura del sistema

La puesta en práctica de las medidas incluidas en el Decreto Ley 1/2012 va a suponer, además de una importante reducción del poder adquisitivo de los profesionales sanitarios que trabajan para el sector público con la consiguiente desmotivación, una restructuración de las condiciones laborales y reducción de personal; todo ello puede afectar seriamente, de forma negativa, a la calidad asistencial y poner en peligro la seguridad de los usuarios.

En este contexto, los presidentes y decanos de los colegios profesionales citados no piden negociar con la Administración las fórmulas para salir de la situación actual, ya que ello es asunto de los sindicatos, aunque sí solicitan asesorar a los gestores para buscar las soluciones más adecuadas para ello. En este sentido quieren mostrar su total apoyo a los agentes sociales en las negociaciones que están llevando a cabo para minimizar el impacto de estas medidas.